

## ¿PRIMAVERA EN ESPAÑA?

El cambio de rumbo político más veloz de los últimos años se vio desencadenado de forma notoria mediante mensajes de texto. «¿Aznar de rositas?», comenzaba uno de ellos<sup>1</sup>. Fue la descarada manipulación de los atentados del 11 de marzo en la estación de Atocha en Madrid por parte del presidente español lo que hizo que un resultado así resultara repentinamente intolerable para un estrato masivo de votantes socialistas, que hasta entonces habían dado sobradas muestras de optar por la abstención en las elecciones españolas de 2004, tal y como hicieron en 2000. El Partido Popular, de centro derecha, tenía buenos motivos para confiar en la consecución de una tercera legislatura, aunque fuera formando coalición. La economía española se vio aupada por un aumento vertiginoso del consumo basado en la disponibilidad de crédito. La oposición masiva al papel del gobierno en Iraq no impidió que el PP obtuviera unos aceptables buenos resultados en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2003. Aunque la arrogancia de Aznar comenzaba a resultar insoportable, éste se estaba retirando ya de la escena política, mientras que su sucesor designado, Mariano Rajoy, resultaba una presencia menos desabrida. Aunque, por encima de todo, el partido gobernante podía contar con el hecho de que los votantes socialistas estaban aún demasiado asqueados por lo que tuvieron que tragar durante catorce años con Felipe González como para que cupiera esperar grandes resultados para la candidatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

Lo que consiguió Aznar con su reflejo oportunista, que le llevó a culpar a los nacionalistas vascos de los atentados de Atocha –por suerte, ninguno de los trenes había entrado aún en la inmensa rotonda de la estación– fue unir a la oposición, en una atmósfera de intensa emoción nacional, en torno a las dos cuestiones que definieron una segunda legislatura cada vez más dura y conservadora: la subordinación al imperialismo estadounidense en el exterior, y la deliberada exacerbación de la relación entre los nacionalismos periféricos y el Estado central en el interior. En otros lugares

---

<sup>1</sup> El mensaje continuaba: «¿Le llaman jornada de reflexión y Urdaci trabaja? Hoy 13M a las 18h sede PP c/ Génova, 13. Sin partidos. Silencio por la verdad. ¡Pásalo!».



—tal vez en Gran Bretaña y sin duda en Estados Unidos— un ataque terrorista islamista podría haber sido calculado para reforzar el apoyo electoral a un gobierno enredado en las ocupaciones de Iraq y Afganistán. En España se reconocía abiertamente que la hostilidad generalizada a la guerra de Iraq sólo podía verse reforzada, y corría el riesgo de ser movilizadora por un atentado de tales características. La campaña de prensa orquestada para señalar con el dedo al grupo separatista vasco ETA no hizo sino profundizar las sospechas ciudadanas de que las aguas estaban siendo enturbiadas. Una manifestación oficial convocada por el gobierno el 12 de marzo —«Por la Constitución. Contra el terrorismo»— se vio rebasada por las protestas masivas convocadas mediante mensajes de texto al día siguiente. Quedó claro que, por primera vez en muchos años, la elección de un partido en vez del otro podía tener un impacto en el escenario geopolítico.

El resultado fue una participación del 77,2 por 100, un aumento significativo respecto al 68 por 100 en 2000 (aunque en consonancia con los resultados de más del 77 por 100 en 1993 y 1996). El PSOE recibió 11 millones de votos, que constituyeron el 42,6 por 100 de los sufragios, en comparación con los 9,6 millones de votos para el PP, que supusieron el 36,7 por 100. El sistema electoral español, que favorece notablemente a los grandes partidos —amañado para ayudar a los herederos de Franco, pero que continuó en vigor durante década y media de dominio socialista— adjudicó al PSOE 164 diputados, esto es, el 47 por 100 de los escaños del Congreso de los Diputados, mientras que el PP consiguió 148; otros 30 escaños se dividieron entre los nacionalistas de CIU (10), ERC (8) y PNV (7), y la coalición progresista Izquierda Unida (5). Los socialistas de

Zapatero podrían formar un gobierno de minoría con el apoyo informal de IU y de los nacionalistas.

En otros lugares, los principales criminales de guerra del siglo XXI han resultado holgadamente reelegidos; ha sido el caso de Bush y Howard, de vuelta al gobierno en 2004, y de Blair, que se prepara a su vez para dar el salto. Sólo en España la indignación popular ha desalojado del poder a uno de los principales colaboradores de la agresión imperial estadounidense. Lo que tal vez resulta más sorprendente es que Zapatero no sólo cumplió su promesa electoral de retirar de inmediato las tropas de Iraq, sino que es el único líder mundial que ha denunciado a Bush y a Blair por la invasión de aquel país «apoyándose en mentiras». Su ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha realizado gestiones para el levantamiento de las sanciones a Cuba de la UE de 2003 y para el restablecimiento de los lazos con Chávez en Venezuela, lamentando públicamente el apoyo de su predecesor al intento de golpe de 2002. En el interior, se ha presentado proyectos de ley para revocar las reformas educativas favorables a la educación religiosa implantadas por los gobiernos de Aznar y para legalizar el matrimonio gay. Un nuevo decreto permitirá a los inmigrantes indocumentados que puedan acreditar que trabajan la regularización de su situación legal. ¿Qué tipo de avance representa la victoria socialista en España? ¿Qué juicio cabe formarse del gobierno Zapatero?

### *Impugnando al Estado*

En su dinámica estructural, el campo de fuerzas de la política española contemporánea sigue estando determinado por el contrato social que fue sellado en la década de 1970 en la transición desde una dictadura autoritaria, después de la muerte de Franco. A su vez, esta transición trató de conservar bajo una forma democrático-liberal muchas de las soluciones que los vencedores de la Guerra Civil impusieron sobre los conflictos sociales –sobre las formas del poder del Estado, el modelo socioeconómico, la Iglesia, la Corona, el Ejército– que sacudieron a España a lo largo de su turbulento siglo XIX, durante la larga lucha por el derrocamiento del absolutismo y la instauración de un Estado burgués. En el contexto de una profunda crisis estructural, las facciones rivales de las clases dominantes se afanaron para intensificar los procesos de acumulación de capital aun cuando luchaban para consolidar su hegemonía, sin que ninguno de los bandos fuera lo bastante fuerte como para imponer una victoria duradera.

La primera constitución escrita española –proclamada en 1812 en la convocatoria de las Cortes de guerra de Cádiz, asediada por la fuerzas napoleónicas– era de las más progresistas de la época: una legislatura elegida por sufragio universal (indirecto) de los varones, a cuya cabeza figuraba el monarca. La restauración de Fernando VII de Borbón en 1814 anunció una era de intensa reacción que, a su vez, provocó un *pronunciamiento* a cargo de oficiales del ejército de ideología liberal en 1820, favorable a la constitu-

ción de 1812. Fernando fue reintegrado a la Corona en 1823, después de un año de guerra civil, pero para entonces las colonias americanas se había rebelado abiertamente. Los modernizadores de Madrid tomaron la iniciativa de nuevo a la muerte de Fernando en 1823, respaldando a su hija la infanta Isabel en sus aspiraciones al trono, mientras que la contrarrevolución católica y la reacción del norte del país (Navarra, País Vasco, partes de la Cataluña rural y Aragón) se alinearon tras la bandera de Don Carlos, el hermano menor de Fernando, en las guerras civiles de 1822-1839 y 1846-1848. La victoria insegura de los primeros se basó en parte en la expropiación de los monasterios, que creó una poderosa clase de terratenientes y provocó el fortalecimiento de la alianza de una Iglesia ahora empobrecida y resentida con la reacción carlista. A finales de la década de 1860, el régimen corrupto e irresponsable de Isabel había perdido el apoyo del ejército y de los sectores liberales urbanos. El pronunciamiento del general Prim, que la derrocó en 1868, y que aspiraba a instaurar una monarquía constitucional con la importación de Amadeo de Saboya, coincidió con un nuevo levantamiento carlista.

Sin embargo, en ese momento la lucha política de las clases dominantes se vio interrumpida por nuevos actores, a medida que una clase obrera artesanal y un campesinado insurrecto se abrieron camino en el escenario político. Durante la efímera Primera República de 1874-1875 que se instauró tras la abdicación de Amadeo, las fuerzas pequeñoburguesas insurgentes, dirigidas por Francisco Pi y Margall, intentaron una modernización de carácter anticlerical y federalista, rayana peligrosamente en el modelo de la Comuna de París. La restauración de la monarquía en 1875, impuesta a golpe de bayoneta, logró en un principio una cierta estabilización mediante una oligarquía parlamentaria, mediante la cual el presidente conservador Cánovas y el liberal Sagasta se alternaban en el gobierno en un «turno pacífico» bajo la corona borbónica<sup>2</sup>.

Sin embargo, llegada la década de 1920, las formas peculiares del desarrollo desigual español (en el que las regiones más ricas y dinámicas de un capitalismo en proceso de industrialización, Cataluña y el País Vasco, se contraponían al centro agrario profundamente conservador; la combinación de una masa desesperada de campesinos sin tierra, radicalizada por un anarquismo incendiario, y la creciente influencia del anarcosindicalismo entre la clase obrera artesanal del noreste; una burguesía industrial débil; un ejército escocido por las derrotas de 1898 e hipertrofiado y desgastado inútilmente en Marruecos; una clase terrateniente reaccionaria y de una estrechez de miras brutal y una Iglesia despojada de sus tierras por reformas modernizadoras esporádicas) habían roto estos límites. Respaldado por el rey, la dictadura del general Primo de Rivera intentó dismantelar la militancia obrera y republicana de izquierdas desde 1923, lo que no condujo más que a una

---

<sup>2</sup> Véase Manuel TUÑÓN DE LARA, (ed.), *Historia de España*, Barcelona, 1980; M. TUÑÓN DE LARA, *La España del siglo XIX*, Madrid, 2000; y Miguel ARTOLA (ed.), *Historia de España*, Madrid, 1988.

radicalización de ambas fuerzas. La restauración de las elecciones municipales en 1931 precipitó masivamente a los republicanos a los ayuntamientos en grandes áreas del país; dos días después, Alfonso XIII partía al exilio y la república era proclamada. Los objetivos de ésta eran la modernización tanto de las formas constitucionales como de las relaciones de producción, el sometimiento del ejército y el reajuste de las relaciones con la Iglesia. La intensificación de las batallas políticas de la década de 1930 –huelgas y levantamientos proletarios, contragolpes policiales y militares– polarizaron un bloque dispar de rentistas, falangistas, carlistas, conservadores de clase media, fuerzas armadas e Iglesia contra el Frente Popular de republicanos de izquierda, socialistas, comunistas y sindicalistas. El alzamiento militar de julio de 1936 condujo a ambos bandos a una guerra civil abierta.

### *Modernización autoritaria*

La victoria nacionalista de 1939 bajo el general Franco garantizó la resolución final de todas las principales cuestiones (relaciones de propiedad, papel de la Iglesia, subordinación de los nacionalismos periféricos al Estado central) en términos extremadamente conservadores. En 1947, la Ley de Sucesión del Generalísimo resolvió la cuestión republicana declarando que España, «en conformidad con sus tradiciones», se proclamaba como un reino, en el que él figuraba como regente y Juan Carlos de Borbón, el nieto más flexible del todavía vivo Alfonso XIII, como el presunto Príncipe de España y heredero final de Franco. Bajo el «Nuevo Estado», la Iglesia recibió una posición dominante dentro del sistema educativo; la instrucción religiosa fue un elemento obligatorio del *currículum* hasta la licenciatura universitaria. El divorcio fue declarado ilegal. La rígida centralización castellana fue impuesta en todo el país, con la eliminación violenta de las lenguas y las culturas minoritarias. Las purgas, los encarcelamientos masivos y las ejecuciones consolidaron el sistema.

Sin embargo, a diferencia de los regímenes fascistas en Alemania e Italia, la variante española renunció a la construcción de un imperio y permaneció al lado del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. De resultas de ello, la dictadura de Franco fue tranquilamente recuperada para el Mundo Libre a comienzos de la Guerra Fría. El embargo de la ONU fue levantado a petición de Washington, y en 1953 el pacto de Madrid estableció una red de bases de la USAF en España y un enorme complejo naval en condiciones de controlar la entrada en el Mediterráneo en Rota, cerca de Cádiz. Los préstamos estadounidenses fueron decisivos para un segundo estadio de desarrollo «franquista». Aun manteniendo su forma enormemente reaccionaria y clerical-autoritaria, el régimen se embarcó en una expansión económica espectacular, propulsada por las remesas de divisas de los trabajadores españoles en el norte de Europa y, desde principios de la década de 1960, por las primeras oleadas de turismo masivo. El crecimiento acelerado de los sectores industrial y de la construcción de las principales ciudades y de las zonas costeras absorbió la fuerza de trabajo procedente de un campo empo-

brecido y cerrado en sí mismo, a medida que las tasas de crecimiento del PIB entre 1962 y 1975 lo hacían a una media del 7 por 100. En 1960, sólo un 1 por 100 de las familias españolas tenían un receptor de televisión, y sólo el 4 por 100 disponía de frigorífico; en 1975, las cifras se habían aupado a un 87 y un 90 por 100<sup>3</sup>. Este dinamismo contrastaba manifiestamente con el vecino Portugal, donde las estructuras socioeconómicas y las relaciones coloniales de la década de 1920 habían permanecido embalsamadas y en el que la lucha insurreccional para derrocar al régimen de Salazar en 1974-1975 amenazó durante un breve periodo con importar la energías revolucionarias explosivas de un movimiento de liberación nacional del Tercer Mundo a la Europa metropolitana.

### *Democratización desde arriba*

Éste era el contexto en el que, el 20 de noviembre de 1975, el viejo dictador expiró finalmente. Dos días después, Juan Carlos de Borbón, enfundado en su uniforme militar, fue proclamado Rey de España antes las Cortes generales franquistas. Prometió fidelidad «a los principios del Movimiento Nacional». Pero el inmovilismo se estaba convirtiendo en una opción insostenible para las elites. En un año, el número de huelgas pasó de 14,5 millones a 150 millones de horas de trabajo, a medida que una clase obrera en rápido crecimiento y que ascendía entonces a más o menos el 38 por 100 de la fuerza de trabajo, comenzó a hacer sentir su fuerza en un rígido mercado de trabajo, despertando a las corrientes internacionales insurgentes de la época. Las manifestaciones de masas exigían la liberación de todos los presos políticos y la legalización de los partidos políticos. En la izquierda, el Partido Comunista de España, que contaba con la fuerza de sus aproximadamente 100.000 militantes, y que había suscitado la admiración general por su oposición clandestina a Franco, y el más reducido Partido Socialista Obrero Español, estaban decididos a llevar a cabo una «ruptura democrática» con el régimen del Caudillo. Llamaron a la formación de un gobierno provisional, representativo de las principales fuerzas sociales del país, encargado de la celebración de elecciones a una asamblea constituyente que habría de instaurar la tercera república democrática española: una «república federal de nacionalidades», en el programa adoptado por el PSOE en su congreso de 1974 en Suresnes, que también eligió al abogado sevillano de 32 años, Felipe González, como su secretario general<sup>4</sup>.

Para las clases dominantes, se trataba de evitar a toda costa una ruptura semejante. Las alternativas eran, bien una violenta involución siguiendo la estela de Pinochet, que habría adjudicado a España el *status* de paria dentro de Europa, bien un cauto desplazamiento hacia un marco democrático.

<sup>3</sup> Richard GUNTHER *et al.* (eds.), *Democracy in Modern Spain*, New Haven, 2004, p. 70, citando a José CASTILLO CASTILLO, «Los hijos de la sociedad de consumo española», *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* 17 (1982).

<sup>4</sup> Para un estudio amplio de las actitudes populares en aquel periodo, véase Ronald FRASER, «Spain on the Brink», *NLR* 1/96 (marzo-abril de 1976).

Sin embargo, ¿cómo democratizar sin abrir la puerta a las tradiciones radicales de las masas (republicanismo, socialismo, comunismo, nacionalismos periféricos), largo tiempo sofocados bajo Franco, pero que ahora amenazaban con resurgir? Por encima de todo, la gestión de la transición debía permanecer en manos de las élites, mientras que los elementos inflexibles del ejército y de la Iglesia debían ser convencidos de que todo debía cambiar para que todo permaneciera igual. Con el nombramiento de Adolfo Suárez, funcionario del Movimiento Nacional, como presidente del gobierno en 1976, se puso en marcha el engranaje de la remodelación institucional de arriba abajo. Suárez no tardó en formar un gabinete escogido entre las filas de los reformadores y de los tecnócratas del Opus Dei que habían impulsado la modernización en la década de 1960. En noviembre de 1976, la Ley de Reforma Política, que sentaba las bases para los cambios venideros, fue tramitada y aprobada por las Cortes franquistas, y ratificada por un referéndum nacional el mes siguiente. En la primavera de 1977, los partidos políticos de la oposición y los sindicatos independientes fueron legalizados y los presos políticos fueron puestos en libertad. En julio de 1977, las viejas Cortes fueron disueltas y se eligió un nuevo parlamento, con arreglo a un sistema cuidadosamente amañado para garantizar la preponderancia de un vencedor centrista. El partido de Suárez, la Unión de Centro Democrático, con tan sólo el 34 por 100 de los votos, fue correspondido como era de esperar con el 47 por 100 de los 350 escaños.

Para diciembre de 1978 ya se había redactado una nueva constitución, aprobada por el parlamento y ratificada por un referéndum nacional. Su Título II entronizaba al monarca borbónico, el heredero designado por Franco, como Jefe del Estado y comandante supremo de las fuerzas armadas. Otros artículos santificaban el principio de la propiedad privada, la financiación estatal garantizada para las escuelas católicas y confirmaba que la Iglesia contaría con «la cooperación de los poderes públicos». En octubre de 1977, la militancia obrera se vio refrenada por los acuerdos forjados con los dirigentes socialistas y comunistas, conocidos como los Pactos de la Moncloa. Reunidos con Suárez en el Palacio de la Moncloa, González y Carrillo comprometieron a las respectivas confederaciones sindicales de cada uno de sus partidos, UGT y CCOO, a un acuerdo blindado de moderación salarial, a cambio de futuras reformas sociales vagamente definidas. La cifra de huelgas cayó en picado y el desempleo aumentó vertiginosamente, a medida que los empresarios aprovecharon la repentina flexibilidad de los sindicatos para instaurar la reserva de fuerza de trabajo más grande de Europa occidental. Mientras tanto, los edificios de la burocracia, la judicatura, las fuerzas armadas y la policía franquistas prácticamente no sufrieron ninguna modificación: la «auto-reforma» bastaba para prepararles para la democracia.

### *Una izquierda neomonárquica*

¿Cómo pudo lograrse un consenso tan rápido en torno a cuestiones que habían desgarrado a España durante más de un siglo (el modelo socioeco-

nómico, la monarquía frente a la república, el estatuto de la Iglesia)? El PSOE y el PCE justificaron su capitulación, ratificando en realidad el resultado de la Guerra Civil, aduciendo la necesidad imperiosa de instaurar una democracia liberal en España antes de considerar otros objetivos, en medio de la omnipresente amenaza de una vuelta a la dictadura militar si la barca se meneaba en exceso. Estos temores habían calado profundamente. No obstante, el revanchismo habría contado con la oposición de amplios sectores de la elite económica y política, inclinadas a la «normalización» y la integración en la CEE. Unidos, los dos partidos de izquierda podrían haber ejercido una poderosa atracción gravitacional dentro del proceso de transición, exigiendo, por ejemplo, que la alternativa entre una monarquía de libre mercado o una república federal de las nacionalidades fueran sometidas a referéndum. En su lugar, el PCE, bajo la dirección de Carrillo, se desvivió para apaciguar a los poderes dominantes, abandonando todo su legado programático a cambio de la legalización, y firmando todas las exigencias de las elites.

No obstante, la base del PCE era demasiado grande, demasiado impredecible y demasiado proletaria como para ofrecer un instrumento fiable para la transición. Los socialistas habían jugado un papel clave en la Segunda República, pero su partido había languidecido durante los años de la dictadura franquista. A principios de la década de 1970 su número de afiliados no pasaba de 5.000 y la mayoría de sus dirigentes estaban en el exilio francés. El PSOE pudo poner en pie la red nacional de Casas del Pueblo con la que contaba hacia 1975 gracias a las donaciones fraternas del SPD alemán al tiempo que la socialdemocracia europea no cejó en sus esfuerzos para proporcionar una alternativa de izquierda más segura que el PCE en el periodo posfranquista. Buenos asesores políticos dotaron a los socialistas de un programa más radical y más democrático que el marchamo del eurocomunismo, timorato por fuera y autoritario por dentro, que caracterizaba al partido de Carrillo. Mientras que el PCE renunció a su republicanismo sin rechistar, en un principio los socialistas continuaron representando su comedia, sosteniendo que una monarquía no electa era incompatible con la democracia, y oponiéndose al ingreso de España en la OTAN y lanzando promesas de «socialización». Cuando se celebraron las elecciones de julio de 1977, el PSOE había superado a los comunistas, obteniendo el 29 por 100 de los votos, frente al 9 por 100 del PCE y convirtiéndose en el segundo partido en el Congreso, tras la UCD de Suárez.

En lo sucesivo, los socialistas de González serían tranquilamente incorporados al sistema político español. El «rencor» político que un veterano observador lamentaba en la Segunda República estaba marcadamente ausente cuarenta años más tarde. Cuando las discusiones sobre el proyecto de constitución corrían el riesgo de empantanarse en 1978, se concertó un encuentro privado entre cuatro representantes de la UCD y cuatro diputados socialistas en el restaurante de moda *José Luis*. Llegada la noche habían conseguido ponerse de acuerdo respecto a las principales cuestiones religiosas (separación entre Iglesia y Estado, educación, divorcio, abor-



to), las relaciones laborales, la objeción de conciencia al servicio militar y los principios constitucionales que determinaban el papel del Estado en la economía». El PCE y los diputados catalanes, aunque no fueron invitados a la cena, «dieron de antemano su visto bueno a esta negociación privada y bilateral»<sup>5</sup>.

### *Presiones desde la periferia*

Sólo una de las áreas más importantes se resistía a un consenso fácil. El Estado franquista había aplastado brutalmente a los nacionalismos periféricos presentes en España, pero no había logrado forjar en sustitución de los mismos una nueva unidad nacional ni borrar su larga historia de relaciones conflictivas con el poder central. La unificación de España implicó, desde sus primeras fases, la subordinación forzosa de las periferias a los reinos centrales. La expansión de Castilla y León impuso la voluntad del monarca y la lengua castellana hacia el interior de la península. El expansionismo de Aragón, orientado fundamentalmente hacia el Mediterráneo, conservó un carácter más confederal, concediendo *fueros* (derechos de autogobierno mediante Cortes propias) a sus tierras conquistadas. Unidos por el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1469, los dos reinos conservaron sus tradiciones separadas; la dinastía de los Austrias, instaurada en 1516 con el ascenso al trono de Carlos I, las conservó durante doscientos largos años. Sólo con la llegada de los Borbones en 1700 fueron castigadas las provincias rebeldes de Aragón, Valencia y Cataluña, partidarias de los Austrias, con la abolición de sus *fueros*. Sin embargo, Navarra y las Provincias Vascongadas, partidarias de los Borbones, lograron conservar buena parte de su autogobierno, hasta el punto de que estas últimas conservaron sus derechos forales hasta su derrota en la tercera guerra carlista de 1876.

Los nacionalismos que cobraron expresión en esas regiones bajo las condiciones de desarrollo del siglo XIX cobraron formas muy distintas. Aprovechando en gran medida el sostén de la población católica rural y pequeño burguesa, en 1895 fue fundado el Partido Nacionalista Vasco por un joven carlista, Sabino Arana, con el lema: «*Jaingokua eta lagi zarra*» [«Dios y las viejas leyes»]. En un lamento por la llegada de trabajadores del interior de la península así como por las chimeneas de las fábricas que mancillaban la pureza de la Tierra de los Vascos, el manifiesto de Arana, *Vizcaya por sus fueros*, reafirmaba los viejos derechos forales del reino, perdidos tras la represión castellana; no obstante, la Euzkadi restaurada tendría que incluir en realidad a Navarra y a las tres provincias del País Vasco francés, así como Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Habida cuenta de que la lengua prerrománica vasca se estaba viendo confinada cada vez más al campo y las zonas montañosas, la vasquidad era definida por Arana con arreglo a criterios estricta-

<sup>5</sup> Gunther *et al.*, *Democracy in Modern Spain*, cit., p. 113. Sobre el «rencor»: Juan LINZ, «Tradition and Modernity in Spain», 1972 (inédito), citado en *ibid.*, p. 36.

mente etnonacionalistas, excluyendo a los trabajadores migrantes. Sin embargo, el gran capital de la región, tanto financiero (dos de los bancos más grandes de España) como industrial (astilleros, metalurgia) permanecieron estrechamente ligados a Madrid, mientras que la clase obrera de Vizcaya era predominantemente socialista y, por lo tanto, federal.

En cambio, el nacionalismo catalán de finales del siglo XIX se desarrolló con el pleno respaldo del capital local, dentro de una economía basada en gran medida en la industria textil y las manufacturas ligeras, compuesta de empresas familiares que abastecían a un mercado regional en crecimiento vertiginoso. Los intereses empresariales dominaban en la Lliga Regionalista Catalana, formada en 1897. El catalanismo se definía en términos culturales, y no étnicos; la lengua románica era relativamente accesible a los inmigrantes de lengua española, cuyo trabajo permitía impulsar los talleres y los telares. La Lliga aspiraba al autogobierno antes que a la independencia nacional, y siempre estuvo dispuesta a anteponer la clase a la «catalanidad» cuando se hizo precisa la ayuda del gobierno central para reprimir al proletariado de la región, cada vez más politizado. Su oponente radical, Esquerra Republicana de Catalunya, barrió en las elecciones de 1931. Cataluña consiguió un estatuto de plena autonomía durante la Segunda República en 1932, y Esquerra formó un gobierno regional en coalición con los partidos de izquierda. Sin embargo, ante el ascenso de los trabajadores anarcosindicalistas en Barcelona en mayo de 1937, en un periodo crítico de la guerra civil, la República catalana optó de nuevo por llamar a las fuerzas del gobierno central para restaurar el orden, sellando así su propio destino.

Durante la Segunda República, el PNV dio un apoyo ambivalente al gobierno anticlerical del Frente Popular, que concedió un estatuto autónomo a las tres provincias vascas en 1936. La región se vio terriblemente dividida por la Guerra Civil. Álava y Navarra, provincias rurales, fueron fervorosamente favorables a Franco, hasta el punto de que la última contribuyó a bloquear la frontera francesa para impedir la entrada de ayuda para la República. Vizcaya sólo sucumbió a las fuerzas de Franco en 1937, después del bombardeo nazi de Guernica y Bilbao, y sufrió lo peor de la represión bajo el «Nuevo Estado», mientras que Navarra conservó sus derechos forales. Asimismo, la oligarquía financiera e industrial vasca permaneció inquebrantablemente centralista.

La brutal represión de las aspiraciones vascas y catalanas a la autodeterminación bajo el régimen de Franco no consiguió extinguir el sentido de diferencia cultural de ambas regiones. Con una hacienda pública rígidamente controlada por la burocracia franquista de Madrid, las quejas del capital local se vieron agudizadas por las percepciones de una subinversión, que socavaban el desarrollo de las regiones de mayor crecimiento de España (en 1975, el PIB per cápita superaba en un 37 por 100 la media nacional en Cataluña, y un 48 por 100 en Vizcaya). Con la muerte de Franco, manifestaciones que superaban el millón de personas reivindicaron, bajo la bandera catalana, la restitución del estatuto de autonomía,

una reivindicación prácticamente universal que unió a unos socialistas que cobraban renovadas fuerzas (PSC), a los comunistas (PSUC), a los republicanos (ERC) y a la coalición catalanista de centro-derecha del banquero y activista Jordi Pujol, Convergència i Unió, formada en 1978.

En el País Vasco, una facción radical se separó del PNV clandestino en 1959 para formar Euzkadi ta Askatasuna [«Euskadi y Libertad»], que posteriormente adoptaría un programa de lucha armada contra el régimen de Franco. A finales de la década de 1960, una nueva generación de estudiantes y trabajadores se radicalizó ante la represión de la Guardia Civil franquista, que disparaba sobre huelguistas y manifestantes; el estado de emergencia fue declarado tres veces en Vizcaya entre 1968 y 1970. Bajo la presión de una fuerte competencia radical-separatista, la dirección de la mayoría del PNV oscilaba entre las reivindicaciones de autonomía y la plena independencia, a medida que intentaban tener un pie en cada lado de la lógica contradictoria del maximalismo vasco: cuanto más extenso se volvía el proyectado Estado-nación vasco (¿Navarra, País Vasco francés?), más crecía la mayoría popular antiseparatista entre sus supuestos ciudadanos.

### *«Estado de las autonomías»*

La constitución de la Primera República española de 1873 fue vigorosamente federal: «La nación española se compone de Estados». La Segunda República concedió el autogobierno sólo a las dos principales regiones, mediante un estatuto específico, en gran medida para reforzar su apoyo contra el ejército. La constitución de 1978, soldando los temores de la elite castellana con los deseos de las burguesías periféricas, intentó despolitizar y burocratizar la cuestión territorial, a la par que difuminaba el impacto de la lucha de clases sobre el Estado central mediante la dispersión de la administración de los asuntos públicos. Su Título VIII sancionaba un modelo nominalmente centralista, pero que quedaba tendencialmente abierto a una interpretación más federalista, mientras que las fuerzas armadas seguían siendo el garante en última instancia de la integridad territorial. Cualquier otro marco federal mediante el cual las regiones pudieran determinar sus relaciones recíprocas quedaba, de forma intencionada, vagamente definido: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas». Los arquitectos de la transición tenían por encima de todo la intención de mantener las negociaciones en un plano bilateral entre las elites: el centro trataba con cada una de las regiones por separado en las habitaciones cerradas a cal y canto del Palacio de la Moncloa<sup>6</sup>. La Constitución se limitaba a habilitar mecanismos para la transfe-

---

<sup>6</sup> Antes incluso de que el Título VIII fuera redactado, Suárez comenzó a maniobrar para poner en pie un marco de burocracias preautonómicas clientelares.

rencia de una lista *à la carte* de funciones administrativas a unas nuevas «Comunidades Autónomas» sin especificar, y establecía diferentes procedimientos para la creación de estas últimas. Esta deliberada indeterminación fue aprobada por las Cortes en octubre de 1978, y ratificada en un referéndum dos meses más tarde.

En el verano de 1979, las elites políticas de las provincias vascas y de Cataluña acudieron en tropel, como era de esperar, a la Moncloa y salieron enarbolando sus respectivos estatutos de autonomía: el Estatuto de Guernica y el Estatuto de Sau. A ambas les fue concedido un control sustancial sobre los recursos de su región, la educación, la sanidad, los servicios sociales, las instituciones culturales, etc. Sin embargo, el resultado inesperado fue el de desencadenar una oleada de reivindicaciones competitivas de estatutos de autonomía por parte de las elites políticas a lo largo y ancho del país. Cuando Suárez y la UCD lucharon para mantener a éstas bajo el control de Madrid, los políticos locales del PSOE, con el ojo puesto en los presupuestos de las Comunidades Autónomas, vieron una oportunidad de tacharles de centralistas franquistas, redoblando así sus reivindicaciones. La UCD sufrió una serie de aplastantes derrotas en Andalucía, Cataluña y el País Vasco, en medio de la constante violencia de ETA. El partido de Suárez ya había sufrido desgarros a causa de la entrada en la OTAN, el empeoramiento de la situación económica y la descentralización. En enero de 1981 Suárez dimitió, siendo reemplazado por Leopoldo Calvo Sotelo, otro ex franquista.

El 23 de febrero de 1981, justo el día en que tenía lugar en las Cortes el acto de investidura de Calvo Sotelo, un grupo de guardias civiles, conducido por el teniente coronel Tejero irrumpió en la Cámara, reteniendo a los diputados a punta de pistola. El intento de golpe se vino abajo en 24 horas, y el Rey fue saludado como salvador nacional gracias a las llamadas telefónicas que realizó para tranquilizar a los oficiales que habían sido sus compañeros de juegos en el séquito de Franco. Sin embargo, el efecto consistió en poner de manifiesto la necesidad de un instrumento político más estable y legítimo. Sin embargo, dos elementos finales del sistema posfranquista estaban puestos a salvo antes de que las elecciones de 1982 permitieran la llegada al poder del PSOE. En primer lugar, la creación de Comunidades Autónomas fue regulada desde arriba por la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico). En segundo lugar, en una ráfaga de negociaciones a toda prisa, España fue incorporada a la estructura política de la OTAN y su integración fue ratificada por las Cortes.

### *Llegan los socialistas*

De esta suerte, el triunfo electoral de los socialistas en 1982 se produjo en medio de un paisaje político achatado. En la izquierda, el PCE había dilapidado el capital moral y político obtenido a un durísimo precio gracias a su valiente trabajo clandestino contra la dictadura. Su porcentaje

electoral cayó del 10,8 por 100 en 1979 al 4 por 100 en 1982, de tal suerte que el partido se hundió entre escisiones y reproches. En la derecha, de forma mucho más espectacular, la gobernante UCD había sido borrada del mapa. Sus candidatos arañaron un escaso 6,5 por 100 de los votos, en comparación con el 35 por 100 de 1979. Fuerza Nueva, de extrema derecha, y Solidaridad Española, de Tejero, apenas sumaron 130.000 votos entre las dos. El centro-derecha siguió conservando algunos bastiones en España: CiU en Cataluña y el PNV en el País Vasco mantuvieron sus porcentajes de apoyo electoral; pero estos baluartes periféricos tan sólo sirvieron para sustraer votos a un partido de derechas consolidado en el ámbito nacional. La oposición parlamentaria quedó ahora en las manos exclusivas de la ex franquista Alianza Popular de Manuel Fraga, con un 26,5 de los votos y 106 diputados en el Congreso, empequeñecidos por el 48,4 por 100 de los socialistas de González y su mayoría parlamentaria artificialmente reforzada de 202 escaños.

Al mismo tiempo, la expansión institucional masiva de las nuevas administraciones regionales y municipales ofreció decenas de miles de lucrativas oportunidades de empleo para los socialistas y sus partidarios. La vida interna del partido se vio transformada: de una formación activista histórica, con un fuerte compromiso de sus bases con el ideario socialdemócrata, el PSOE no tardó en convertirse en una estructura de promoción profesional encas-trada en las instituciones y bien remunerada para aquellos que abrazaran puntos de vista vagamente progresistas y liberal-capitalistas. La dirección conjunta de González, como mascarón de proa carismático y estrategia, y Alfonso Guerra, como jefe del partido, impusieron una rígida disciplina ideológica sobre la jerarquía del PSOE mediante el control del proceso de nombramiento de los candidatos. El papel de los afiliados en la definición de la política del partido fue materialmente eliminado, de tal suerte que las oligarquías se hicieron con todos los resortes del partido. Los barones regionales del mismo, con enormes presupuestos a su disposición, podían comprar la lealtad de sus empleados en bastiones socialistas tales como Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Ésta fue la cultura en la que la generación de Zapatero llegó a la mayoría de edad.

La cohesión ideológica de este Behemoth político vino del exterior. Desde su lanzamiento en 1976 por parte del grupo mediático PRISA y bajo la dirección de Juan Luis Cebrián, el principal periódico español, *El País*, se postuló como tutor moral y político del periodo posttransición, legislando los límites aceptables de la nueva normalidad. Su fórmula consistió en la reducción de todos los problemas sociales a cuestiones de consenso: un consenso ya definido en favor de los grandes intereses del capital español por las fracciones modernizadoras de la elite franquista. Toda posición había de ser juzgada en función de si contribuía a promover el acuerdo social prescrito en la transición. Pese a las evidencias que manifestaban lo contrario, oscuras fuerzas revanchistas («atendiendo a nuestra historia») podían amenazar todavía la democracia capitalista en España. Así, pues, el conflicto era siempre peligroso, y la moderación siempre buena.

*El País* no tardó en poner a punto un *modus operandi* que funcionaría como barómetro cotidiano del proceso ideológico. En primer lugar, se trata de proporcionar un análisis realista de la situación, teniendo en cuenta el equilibrio de fuerzas políticas y asegurándose al mismo tiempo de no superar nunca los parámetros acordados; en segundo lugar, de ajustar el diagnóstico para incluir en el mismo todos los intereses materiales particulares en juego; en tercer lugar, de convertir los resultados de este proceso en una sugerencia moderada de alguna forma de intervención pública, que debía ser lo bastante ambigua como para que las negociaciones entre las partes interesadas continuaran entre bastidores. Entonces, el producto final de estas negociaciones podrá ser evaluado, dando el debido asentimiento a las actitudes sensibles y realistas de los interesados, y presentado al público como un desenlace satisfactoriamente razonable. (En realidad, la mayor parte del esfuerzo se emplea más en ratificar los resultados de esos procesos opacos que en diagnosticar el problema en primer lugar.) Todos los puntos de vista alternativos que pudieran poner en tela de juicio los parámetros de la era posfranquista eran enterrados o ignorados. De esta suerte, el diario ha jugado un papel decisivo en la atrofia concertada de la discusión pública y del pensamiento crítico o, dicho de otra manera, en el mantenimiento de las condiciones de monopolio ideológico mucho tiempo después de la muerte del dictador. El vasto y abigarrado campo ideológico de la España prefranquista –futuristas, falangistas, monárquicos, republicanos, socialistas, comunistas, libertarios de izquierda, anarcosindicalistas– se vio reducida a una inocua conformidad.

En realidad, desde 1982, *El País* –cuya cobertura internacional sigue siendo muy superior a la de *Le Monde* o *The Guardian*– apenas ha flaqueado en su apoyo a los socialistas de González y, en consecuencia, se ha negado a someter las políticas del PSOE a una crítica sostenida. El diario apartó la vista ante la creciente ciénaga de la corrupción socialista, la implicación del gobierno en los asesinatos de activistas vascos por parte de los GAL y el deterioro generalizado de la vida pública española. Su elevado tono moral sólo se echaba a perder con motivo de *lapses* ocasionales de la más cruda demonología de la Guerra Fría, en comparación con la cual los *nouveaux philosophes* podrían parecer modelos de crítica matizada: asimilando, por ejemplo, el papel de Hearst en Cuba con el de Marx, por ejemplo<sup>7</sup>.

### *El felipismo en la práctica*

El paisaje socioeconómico heredado por los socialistas de González se vio igualmente transformado. Los procesos de migración interna masiva, de urbanización y de rápida extensión de los sectores comercial y de servicios, que comenzara con Franco, continuó a una velocidad endiablada. En 1975, España estaba más urbanizada que Bélgica o Italia, los trabajadores del sector servicios emergían como la fracción más importante de

<sup>7</sup> Cfr. Juan Luis CEBRIÁN, «El periodismo en los tiempos del cólera», *El País* (18 de octubre de 2004).

la fuerza de trabajo y el proletariado industrial había entrado en un prolongado declive. La tasa de afiliación sindical pasó de un 26 por 100 de la mano de obra en 1978 a un 10 por 100 en 1985.

**Cuadro 1. La estructura de la economía española, 1940-2000  
(% de la fuerza de trabajo económicamente activa en cada sector)**

Año	Agricultura	Industria y construcción	Servicios
1930	46	26	28
1940	50	23	27
1950	48	26	26
1960	37	30	33
1970	29	37	34
1975	22	38	40
1980	18	38	40
1985	18	34	48
1990	13	34	48
1995	10	31	60
2000	8	30	62

*Fuente:* Richard Gunther *et al.*, (eds.), *Democracy in Modern Spain*, New Haven y Londres, 2004, p. 69, tabla 2.2.

Teniendo en cuenta que había estado ausente, bajo la tutela de Franco, de los principales eventos de mediados del siglo xx —de la Segunda Guerra Mundial, de la socialdemocratización europea de la posguerra, de la cultura popular e intelectual de la década de 1960—, España parecía haber dado un salto directamente hacia el futuro: del siglo xix al siglo xxi, de las luchas de clases de una sociedad rural en proceso de industrialización pasó directamente a la posmodernidad urbana, acompañada de su economía postindustrial, de su democracia ahuecada, de su política presidencialista y de su esfera mediática dominada por las televisiones comerciales.

Con González, los socialistas se propusieron acelerar con creces estos procesos. Con una tasa de desempleo que se había mantenido por encima del 16 por 100 durante más de una década (más de lo que Thatcher podía conseguir), el programa de «reconversión industrial» del PSOE diezmó las fuerzas de trabajo en los sectores siderúrgico, automoción, astilleros, equipos eléctricos pesados y textil. La desregulación del mercado laboral, introducida a dosis escalonadas desde 1984, empeoró drásticamente las condiciones de empleo, facilitando los contratos temporales, el pago irregular de salarios y un aumento general de la inseguridad. Un profundo programa de preprivatizaciones comenzó a preparar los activos del Estado franquista (telecomunicaciones, textiles, turismo, automoción, etc.) para los capitales estadounidenses y europeos. Las tarifas comerciales fueron cercenadas para cumplir las exigencias de la comunidad europea, de tal suerte que el gran objetivo civilizatorio de la entrada en la UE, aquí como en otros lugares, sirvió para legitimar tranquila y cínicamente un nuevo ataque a los pequeños capitales y la clase trabajadora. Los tipos de interés despiadadamente altos crearon una peseta sobrevalorada, lo que asestó un

golpe mortal a la industria pesada de la era franquista, pero infló el valor de los activos financieros. El desempleo se aupó hasta más del 20 por 100; el número de empleos temporales y desprotegidos aumentaron hasta más de 3 millones, mientras que el porcentaje de las ganancias salariales en la renta nacional total experimentó un pronunciado declive. El «*big bang*» de 1988 trajo consigo la desregulación de la Bolsa de Madrid. Bilbao comenzó su odisea que la hizo pasar de bastión proletario a coqueta ciudad cazaturistas.

Planeando este asalto neoliberal, los socialistas españoles iban años por delante del Partido Laborista británico –todavía partidario oficialmente del desarme nuclear y de programas de nacionalización– y probablemente incluso una cabeza por delante de Mitterrand. Sin embargo, por más descarado que se mostrara González en sus batallas en el frente del libre mercado, ningún cortesano habría mostrado mayor deferencia hacia las instituciones del Estado posfranquista edificado en la transición. Rara vez pudo estar el sueño de un monarca español menos turbado por los espectros republicanos, toda vez que los ministros socialistas competían entre sí en muestras de servilismo y empujándose para aparecer al lado de los miembros de la familia borbónica en las páginas de la revista *¡Hola!* Para autolucimiento del sistema político español, y claramente en contra de las instrucciones de Picasso, conforme a las cuales el cuadro no debía volver a España hasta que la monarquía hubiera sido derrocada, el *Guernica* no sólo fue trasladado al Madrid de Juan Carlos, sino que pasó a formar la joya del Museo de Arte Moderno, ahora rebautizado «Reina Sofía».

La Iglesia podía dar gracias a González por el mantenimiento de las enormes ayudas públicas a sus escuelas y sus empleados, frente al creciente secularismo. Una liberalización moderada del divorcio y del aborto eran un precio asequible, toda vez que bienes raíces, salarios y alumnos quedaban garantizados. La modernización del ejército jubiló a la vieja guardia, pero deslumbró a los oficiales más jóvenes con la promesa de tecnología del Pentágono. Tras haberse comprometido a la celebración de un referéndum acerca de la pertenencia a la OTAN –en la oposición, los socialistas defendieron el no alineamiento a medida que Reagan espoleaba la Guerra Fría–, González puso todos los recursos del Estado al servicio de una operación de propaganda en favor de la Alianza Atlántica, afirmando que un voto negativo expulsaría a España de Europa, condenándola al caos político y económico. Con empalagosa insinceridad, las emisiones televisivas de Felipe emulaban al propio Reagan cuando, sobre un fondo de niños felices jugando en la playa y mientras sonaban en un crescendo los compases de una sinfonía de Beethoven, entonaba la palabra «paz»<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> No obstante, 7 millones de personas votaron contra la permanencia de España en la OTAN en 1986, una avanzadilla de las gigantescas manifestaciones españolas contra la invasión de Iraq en 2003. Para un análisis contemporáneo en las páginas de esta revista, véase Patrick CAMILLER, «Spanish Socialism in the Atlantic Order», *NLR* 1/156 (marzo-abril de 1986).



## Forjando de nuevo un centro-derecha

Sin embargo, aunque los socialistas habían demostrado un comportamiento satisfactorio para el capital español, la normalización liberal-democrática exigía la válvula de seguridad de una posible alternativa de gobierno. A principios de la década de 1990, el *boom* financiero de González había fracasado. Una devaluación postergada durante mucho tiempo hizo que la peseta se estrellara de nuevo contra el suelo, provocando una grave recesión y un aumento vertiginoso del paro, justificado, una vez más, como el precio necesario de la integración en Europa. Los escándalos de corrupción enfangaron a la elite felipista, cuando Ollero (Andalucía), Urralburu (Navarra), el hermano de Guerra y otros se vieron implicados en oscuros negocios inmobiliarios, decididos en lujosas y gratuitas habitaciones de la Administración. El ex ministro de Economía Miguel Boyer, el gobernador del Banco de España Mariano Rubio, el jefe del grupo parlamentario del PSOE Carlos Solchaga y otros se vieron envueltos en operaciones hechas gracias a informaciones privilegiadas en la Bolsa con el *holding* IBERCORP. Algunas acusaciones –todavía sin demostrar– han vinculado la enorme fortuna personal de González al régimen podrido de Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Mientras que *El País* mantuvo un arrogante silencio, el nuevo periódico de derecha *El Mundo* llevó a cabo una campaña implacable para demostrar la implicación del gobierno en los asesinatos de activistas vascos por parte de los Grupos Antiterroristas de Liberación.

Durante la década de 1980, el principal partido de la oposición, la ex franquista Alianza Popular de Fraga, nunca atrajo más del 26 por 100 de los votos. El éxito político de José María Aznar, designado líder después de que AP fuera rebautizada como Partido Popular en 1989, consistió en reubicar a este último como un europartido moderno y escasamente ideologizado, una alternativa plausible para una generación joven y pequeñoburguesa que se sentía excluida por la elite del PSOE y apenas se acordaba de Franco. Con sus feos bigotes y su traje grande, Aznar hizo gala con cierta destreza de su modesto historial de inspector de Hacienda para dar voz al resentimiento de la gente menuda ante la ostentosa riqueza y las opiniones arrogantes de los *glitterati* socialistas. En 1993 el PSOE cedió votos tanto al PP como a una izquierda reconstituida –Izquierda Unida, bloque formado por el PCE y sus aliados, ahora bajo la dirección de Julio Anguita– y se vio obligado a buscar el apoyo de los conservadores catalanes, la CiU de Pujol, para formar su nuevo gobierno. Sin embargo, el PP superaba ya al PSOE en número de afiliados. En las elecciones autonómicas de 1995 el PP se aupó al poder en todas las comunidades autónomas salvo cinco<sup>9</sup>. Un año después, a pesar de unos buenos resultados socialistas, el PP de Aznar se impuso por sólo 340.000 votos y formó un gobierno minoritario con el apoyo de tres partidos regionales, CiU, PNV y Coalición Canaria.

<sup>9</sup> El PSOE conservó tan sólo los feudos de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, mientras que los partidos regionales de centro-derecha, CiU y PNV, mantuvieron su influencia en Cataluña y en el País Vasco, respectivamente.

Las políticas del primer gobierno de Aznar, 1996-2000, apenas pudieron distinguirse de las de su predecesor socialista. Los criterios de la convergencia europea dominaron el pensamiento macroeconómico: deflación, austeridad fiscal y bajos tipos de interés estaban al orden del día. Sin embargo, para 1996 la economía española estaba saliendo finalmente de la profunda recesión de los años de González-Solbes. El desempleo cayó del 22,2 por 100 en 1996 al 13,9 por 100 en 2000, mientras que unos tipos de interés por los suelos, que preparaban a la peseta para la moneda única, estimularon un *boom* del consumo basado en la disponibilidad de crédito. Entre 1997 y 2000, el PIB creció a un 4 por 100 anual o más, y no pasó del 2 por 100 de 2001 a 2003. Mucho mejores que las de Francia y Alemania, estas tasas de crecimiento no sólo se apoyaban en una creciente burbuja inmobiliaria, un trabajo inmigrante barato, una demanda interna alcista y la inyección a las arcas públicas de 33.500 millones de euros procedentes de la venta de activos públicos –acicalados durante mucho tiempo para el capital privado por el gobierno del PSOE–, sino también en la constante entrada de fondos de la UE, que ascendieron a un 3 por 100 del PIB si se incluyen las subvenciones agrícolas. Dicho de otra manera, el *boom* de Aznar ha de achacarse a factores externos antes que a la rentabilidad de las empresas españolas.

Al mismo tiempo, las tácticas de Aznar frente a las relaciones centro-periferia se vieron profundamente sobredeterminadas por la dependencia de su gobierno del apoyo de CiU, PNV y Coalición Canaria. Las maniobras de compromiso llevadas a cabo por los arquitectos de la Constitución de 1978 institucionalizaron una inestabilidad llena de rivalidades en el corazón del Estado español. Después de que los acuerdos bilaterales de Suárez con las élites catalanas y vascas en 1979 reconocieran implícitamente su posición privilegiada como Comunidades Autónomas de mucho peso, por encima de las demás, la legislación de la LOAPA de 1981 intentó «armonizar» el campo con respecto al resto de la nacientes CCAA, que protestaban al verse relegadas a una ciudadanía de segunda clase. Las rebeliones vasca y catalana contra lo que consideraban una negación de su *status* acordado llevaron entonces la Ley de 1981 ante el Tribunal Constitucional, que les devolvió algunas de sus ventajas. El cuasifederalismo asimétrico del Estado de las Autonomías español ha estado continuamente plagado por una dinámica centrífuga de igualación, acompañada de la reafirmación competitiva de los privilegios iniciales. Estas tendencias se vieron exacerbadas por las maniobras electorales tendentes a llevar siempre la delantera en las 17 asambleas autonómicas, provocando ocasionales efectos cómicos: Fraga, por ejemplo, antaño un pilar del centralismo franquista, protagonizó una conversión tardía al nacionalismo gallego como presidente de la Xunta autonómica, que le llevó entonces a aparecer como estridente partidario de la «inmersión lingüística» obligatoria en gallego para los escolares de la comunidad.

### *Problemas vascos*

Las rivalidades entre comunidades autónomas se vieron estimuladas nuevamente por las desigualdades sociales. Las regiones más ricas, principal-

mente Madrid, Cataluña y el País Vasco, disfrutaban de un PIB per cápita bastante superior a la media de la UE, absorben cerca del 90 por 100 de la Inversión Extranjera Directa y cuentan con tasas de desempleo de un sólo dígito. En cambio, las regiones más pobres del oeste y el sur tienen un PIB per cápita bastante inferior a la media de la UE (Castilla-La Mancha, un 64,4 por 100; Extremadura, un 60,4 por 100; Andalucía, un 57,5 por 100) y unos niveles de desempleo que llegan al 17 por 100. Tomadas en conjunto, Extremadura, Galicia, Asturias y Castilla y León reciben menos del 0,2 por 100 de la inversión extranjera directa. Mientras que las Comunidades Autónomas, al igual que los *Länder* alemanes, negocian directamente con Bruselas sus propias subvenciones regionales, el grueso de los fondos para su provisión en sanidad, educación, agricultura, bosques, bienestar social, cultura, televisiones regionales, etc., procede del gobierno central de Madrid. La excepción la forman el País Vasco y Navarra, donde los fueros conservados por un Franco agradecido permiten la recaudación fiscal propia y, cada cinco años, la renegociación del concierto conforme al cual se paga a Madrid el precio de sus servicios. De resultados de esto, los presupuestos de Navarra y el País Vasco son entre un 50-75 por 100 más altos que los de otras regiones comparables. Cataluña persigue con celo la adopción del mismo modelo. CiU y PNV consiguieron beneficios tangibles de su apoyo al primer gobierno de Aznar: la proporción de los ingresos fiscales de la región que van directamente a la Administración autónoma ascendió hasta un 30 por 100, un cambio al que se opusieron las CCAA más pobres, toda vez que eliminaba el elemento redistributivo de un sistema de recaudación fiscal nacional. La Administración vasca logró embolsarse la recaudación de los impuestos sobre el tabaco y el alcohol.

Sin embargo, el aumento de la autonomía financiera no se vio acompañada por ningún cambio sustancial en las prácticas judiciales y de la Guardia Civil en el País Vasco, donde la detención sin proceso y los malos tratos y torturas encubiertos por el Estado han continuado con escasas interrupciones bajo los gobiernos socialistas y del PP desde la muerte de Franco. Sin duda, se trata de la zona de la UE donde la tortura se practica más intensamente contra un sector considerable de la población civil (el 10-20 por 100 que apoyan al partido independentista vasco, Herri Batasuna) con la colaboración activa de los Estados francés y español. Las sentencias para los condenados por delitos sin sangre pueden medirse en décadas; los implicados en actos de violencia han sido sentenciados a 3.000 años. Más de setecientos presos vascos, algunos condenados tan sólo por haberse negado a denunciar a ETA, han sido dispersados por distintas cárceles lejos de Euskadi, dificultando enormemente las visitas de sus familiares y amigos. Todo acuerdo negociado debe comenzar con el traslado de los presos a la región de nacimiento, así como el final de la detención preventiva y la vuelta a los cuarteles de la Guardia Civil.

La microdinámica del proceso político de la región ha agravado el atolladero vasco. La amenaza de un aumento de la competencia electoral en la región por parte de un PP en crecimiento acelerado, cuyo programa socio-

económico y cuya perspectiva social conservadora eran prácticamente indistinguibles de la suya, contribuyó a empujar al PNV a una radicalización de su actitud en la cuestión nacional a mediados de la década de 1990. Al mismo tiempo, ETA, que bastante tiempo atrás había abandonado toda componente social de su programa y que ahora se enfrentaba tanto a la represión como a un eclipse político, pasó de los ataques armados al Estado español y sobre objetivos militares a una campaña esporádica de asesinatos de civiles que incluyó entre sus víctimas a concejales municipales, periodistas y profesores universitarios<sup>10</sup>. El asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco por sus secuestradores en junio de 1997 se convirtió en un punto de inflexión, que provocó la indignación popular tanto en el País Vasco como en el resto de España. Le siguió un juicio espectáculo, organizado por el gobierno, de toda la dirección de Herri Batasuna, condenada y sentenciada por el uso de un vídeo de campaña de la organización ETA. En esta atmósfera polarizada, una candidatura sustituta de la proscrita Batasuna obtuvo el 17,9 por 100 de los votos en las elecciones autonómicas del año siguiente, su mayor porcentaje hasta el momento.

En un intento de reafirmar su hegemonía en la región, el PNV negoció un acuerdo de todos los nacionalistas vascos bajo su dirección. El pacto de Lizarra de 1998 consiguió una tregua de ETA mientras que comprometía a sus signatarios a trabajar por una forma vagamente definida de soberanía vasca más allá del Estatuto de autonomía. La respuesta de Aznar fue la de endurecer su propia posición: no se contemplaría ninguna descentralización adicional; las reformas encaminadas a convertir el Senado en una cámara territorial quedarían congeladas. A finales de 1999 ETA puso fin a la tregua, culpando a Madrid por su intransigencia, y dio comienzo a una campaña de *kale borroka* o «lucha callejera» supuestamente encaminada a «socializar el dolor». La delincuencia asesina a que dio lugar sirvió de excusa permanente para la línea del gobierno de Aznar y la táctica de las fuerzas de seguridad. Éste era el contexto en el que el PP consiguió su mayoría absoluta en las elecciones generales de 2000: 44,5 por 100 de los votos, y el 52,3 de los escaños del Congreso de los Diputados. Ahora Aznar tenía las manos libres. En las elecciones vascas de 2001, en cambio, el PNV recogió los frutos del acuerdo de Lizarra, consiguiendo el 42,7 por 100 de los votos, en comparación con su 28 por 100 anterior, mientras que el voto de Batasuna cayó hasta el 10 por 100.

### *El giro atlantista de Aznar*

Espoleado por el respaldo de Estados Unidos y la UE al autoritarismo estatal desde el 11-S, y contando con el pleno apoyo de los socialistas de Zapatero,

---

<sup>10</sup> Sobre ETA, véase Luigi BRUNI, *ETA. Historia política de una lucha armada*, vol. I, y Giovanni GIACOPPUSI, *ETA. Historia política de una lucha armada*, vol. 2, Tafalla, 1989 y 1992; GIACOPPUSI, *ETA pm. El otro camino*, Tafalla, 1997; y la exhaustiva obra colectiva que recorre la historia de la organización hasta 1992, *Euskalherria y la libertad/Euskadi eta Askatasuna*, Tafalla, 1993.

CiU, Coalición Canaria y otros partidos regionales, Aznar impuso la conocida Ley de Partidos Políticos en septiembre de 2002, que dejó manos libres al Tribunal Supremo para poner fuera de la ley a Batasuna y eliminar a sus 1.000 representantes electos en ayuntamientos en la primavera de 2003. Con ello se produjo una clara agudización del doble enfoque de los gobiernos de González, combinando la guerra sucia de los GAL con negociaciones excepcionales. Aznar exageró ahora las reivindicaciones del PNV, llegando a equipararlas con las de ETA y cancelando todo diálogo sobre la reforma constitucional. La respuesta de Juan José Ibarretxe, el nuevo *lehendakari* vasco, consistió en radicalizar más aún la situación. Declarando que no reconocía ni la Ley de Partidos ni el veredicto del Tribunal Supremo, Ibarretxe propuso que la región debería convertirse en un «Estado libre asociado a España», aunque sin llegar a asumir las reivindicaciones independentistas de Batasuna. Con arreglo al Plan Ibarretxe, el Estatuto de Guernica de 1979 sería enmendado por el Parlamento Vasco, para ser luego presentado en el Congreso de los Diputados español y sometido a una consulta popular en el País Vasco, en un referéndum que Aznar se apresuró a calificar de ilegal.

El endurecimiento de la posición de Aznar sobre la cuestión vasca se vio acompañado de un nuevo y polémico atlantismo y de una denigración de las normas de negociación interna de la UE, en discrepancia con la práctica habitual de Madrid. España adoptó una línea delantera agresiva sobre Iraq, sosteniendo que la Resolución 1441 bastaba para que el derrocamiento de Saddam Hussein fuera refrendado por el derecho internacional. Aznar fue un vehículo decisivo para la publicación en *The Wall Street Journal* de la «Carta de los ocho», en la que una Nueva Europa se diferenciaba de la Vieja por su apoyo a la invasión estadounidense. Al mismo tiempo, España se negó en rotundo a cambiar de postura en la renegociación del sistema de votación de la UE acordado en Niza en 2000. ¿Cómo explicar este giro? Es difícil explicarlo atendiendo a los parámetros habituales. Las cosas comienzan a aclararse si se tiene en cuenta que esta opción belicista del PP se halla profundamente entrelazada con la percepción que Aznar tiene de la situación interna y externa de España, así como de su particular concepción del Estado y de la coyuntura que en su opinión afecta a éste, todo ello aderezado con los correspondientes elementos contingentes que se desencadenan tras el 11 de septiembre de 2001 en la política y en las opciones geopolíticas globales estadounidenses.

A nuestro juicio, la reorientación de la política exterior del Estado español responde a las promesas de Estados Unidos sobre cuestiones que afectan al Estado español desde el punto de vista geopolítico (el Magreb y la cuenca mediterránea occidental), geoeconómico (las inversiones del capital español en América Latina y la entrada de flujos de capital tanto financiero como productivo, que presentan una importancia creciente para mantener el buen comportamiento de la balanza de pagos y de la economía española) y geoterritorial (colaboración de Estados Unidos en la lucha contra ETA). En el giro proatlantista de Aznar, la actividad terrorista de ETA y la deriva soberanista del PNV tras el acuerdo soberanista de Lizarrza desempeñan un papel crucial

que altera profundamente y de modo totalmente erróneo su percepción de la política española y la valoración de la situación imperante en el escenario internacional. En última instancia ésta es la variable que explica el comportamiento de Aznar más allá de los factores geopolíticos ligados a la cuenca mediterránea occidental o a la dirección de las inversiones del capital estadounidense, cuyas pautas de actividad pueden verse mejoradas pero no fundamentalmente alteradas por la intervención de la Administración estadounidense. En la guerra contra el terrorismo lanzada por el gobierno de Bush tras el 11-M Aznar vislumbra la posibilidad de resolver definitivamente el denominado conflicto vasco, en tanto que comprende que, sin la presión armada de ETA, tal conflicto entraría en una fase de *normalización democrática* que de acuerdo con su concepción de la política significaría la aceptación, definitiva y sin matices, del marco constitucional por parte del PNV, que en el fondo se siente incómodo con su actual proyecto soberanista –el Plan Ibarretxe–, y cuyas aristas por otra parte se atenúan con la salida de Xavier Arzalluz de la secretaría general del partido, la derrota de su delfín Joseba Egibar y la entrada del pragmático Josu Imaz al frente del mismo.

La participación en la coalición de la guerra le ofrece a Aznar la posibilidad de dotar a la lucha antiterrorista del componente imperial que le faltaba, tras los primeros años de gobierno en los que había cosechado éxitos indiscutibles a la hora de enfrentarse al terrorismo de ETA. El acuerdo de Lizarra es leído por Aznar como la posibilidad de que éste pueda encontrar una legitimación política explícita por parte del PNV que pueda radicalizar definitivamente el conflicto, y que dote al problema de una explosividad institucional que hasta el momento no se había planteado en términos tan explícitos. El momento en que se firma tal pacto irrita también profundamente a Aznar porque en esos momentos la debilidad logística de ETA conoce uno de sus mínimos históricos y un hipotético inicio de resolución policial del conflicto se vislumbra en el horizonte. Durante los poco más de 13 meses que dura la tregua, ETA logra recomponer su maltrecho aparato logístico y se encuentra en condiciones de lanzar una dura ofensiva durante 2000 que al hilo de 70 atentados acaba con la vida de 23 personas, de 15 durante 2001 y cuyo número cae a 5 en 2002 y a 3 en 2003, no habiéndose producido ningún atentado mortal desde finales de mayo de este último año. En este contexto Aznar considera que la alianza con Estados Unidos puede ser decisiva para dotar de la dimensión internacional suficiente a la lucha contra ETA y conseguir así eliminar la lucha armada de la política del Estado español. De acuerdo con esta valoración, Aznar pretende que Estados Unidos (1) preste el apoyo de sus servicios de inteligencia en la península y el sur de Francia para incrementar la presión sobre las redes de ETA; (2) colabore en el desmantelamiento de las debilitadas redes financieras y logísticas de la organización vasca en Europa, América Latina y el Caribe con una colaboración genuina de los servicios secretos estadounidenses y de las redes de los servicios de otros países amigos; y (3) incluya a ETA y a sus dirigentes en las listas de organizaciones terroristas, lo cual implicaba también su inclusión en las listas confeccionadas por la UE; el objetivo es que la actividad terrorista de la organización vasca estuviera en el punto de mira de la opinión públi-

ca internacional y que ello sirviera para legitimar también internamente la política antiterrorista del gobierno del PP. *Last but not least*, Aznar habla con George Bush sobre la posibilidad de que Estados Unidos no utilice los nacionalismos periféricos existentes en el Estado español –fundamentalmente el potencial de lucha armada de ETA– para poner en duda la estabilidad territorial de España en un escenario de intervención mucho más agresiva, protagonizado por la potencia estadounidense en la política europea. El modelo norirlandés de soberanía teóricamente compartida entre Londres, Dublín y Belfast no se aplicaría en el Golfo de Vizcaya<sup>11</sup>. La situación de caos sistémico en la que se encuentra la economía-mundo capitalista, las ambiciones de poder estadounidenses y su crisis de hegemonía, el ejemplo de la contundente intervención estadounidense en las sucesivas guerras balcánicas de la década de 1990, la utilización abierta de la guerra como instrumento para remodelar las relaciones geoeconómicas y geopolíticas globales y la deriva hipernacionalista de ETA, que plausiblemente podría participar en tal diseño estratégico, hacen verosímil ese escenario en una lucha por la hegemonía mundial que ha entrado en una situación de «guerra global de los treinta años» para definir el nuevo juego de poder del capitalismo histórico. La convicción de Aznar es que la permanencia de la unidad del Estado español como entidad política, con independencia de los grados de descentralización y autogobierno que se conceda, es esencial para el proyecto político del Partido Popular y, en ese momento, para la mayoría de la sociedad española que le había aupado a la mayoría absoluta con las elecciones de 2000. Y ello por mor de una percepción totalmente falaz de la situación mundial y de las dinámicas del capitalismo –que prescinde de la importancia crucial del proceso de construcción europea y que evidencia un desprecio total respecto al destino último del proyecto político de la Unión Europea como institución política– y de las innumerables posibilidades de diseño constitucional que pueden articularse dentro de una forma Estado como la española, así como la incapacidad de pensar a partir de las posibilidades inéditas que ofrece el proceso de construcción europea en un horizonte netamente posnacional, en el que los significantes nacionalistas sobredeterminados por la historia de los viejos Estados nacionales y de sus unidades subnacionales perderán, afortunadamente, buena parte de su arcaico contenido cultural, simbólico y político, abriéndose procesos constituyentes totalmente originales que todavía están por construir políticamente.

Estas premisas son las que a nuestro juicio ayudan a comprender mejor el giro trasatlántico de Aznar y la increíble fractura que ha creado en la Unión Europea, tanto en la cuestión crucial de la segunda guerra del Golfo como en la negociación de la Constitución europea, respecto a la cual el gobierno español reclama –junto con Polonia– idéntica cuota de poder que la que le concedió la cumbre de Niza en 2000. Europa y el debilitamiento de la actual

---

<sup>11</sup> La ausencia de una diáspora vasco-estadounidense influyente no deja de tener cierta importancia. Sólo la presión implacable estadounidense, respaldada por el peso del *lobby* irlandés-estadounidense, llevó a Londres a la mesa de negociaciones sobre el Plan Mitchell para un acuerdo negociado en Irlanda del Norte.

forma Estado en un horizonte posnacional, por un lado, y la construcción de una política global que prescindiera de la guerra como instrumento de reestructuración –un oxímoron en el capitalismo histórico– constituyen los ejes de una nueva política que ni Aznar ni el PP están en condiciones de vislumbrar y, por consiguiente, de razonar y trabajar a partir de la misma. Para los dirigentes del PP, tal y como ha revalidado Mariano Rajoy recientemente, la existencia y persistencia de la violencia terrorista en el mundo se explica de acuerdo con un esquema maniqueo, simplista y tranquilizador, que se resume en describirla como el enfrentamiento trivial entre el bien y el mal, declinado con un escasísimo espesor histórico o sociológico, sin que se puedan o se deban analizar las causas sistémicas que la provocan. En palabras de Rajoy, pronunciadas después del 11 de marzo y tras perder las elecciones del 14 siguiente, esta concepción se resume en dos hipótesis demenciales que cuando se tienen responsabilidades de poder no dejan de ser performativas: (1) todos los terrorismos son iguales e indistintos: es la ontología la que explica la historia; (2) analizar sus causas únicamente contribuye a alinearse con el terrorismo y a suministrar argumentos para justificar sus actos: no existen causas estructurales que provoquen ante situaciones de tremenda explotación y desigualdad respuestas violentas o terroristas.

### *El regreso del PSOE*

Éste era el contexto nacional e internacional en el que el 11 de marzo de 2004 Aznar y sus ministros comenzaron a telefonar a los medios de comunicación españoles para insistir en la autoría de ETA en los atentados de la estación de Atocha; el gobierno envió a la ministro de Asuntos Exteriores a la ONU para solicitar una resolución del Consejo de Seguridad condenando a los separatistas vascos; y la televisión pública estatal emitió un largo documental sobre los crímenes de ETA durante la noche del viernes 12. El resultado del 14 de marzo no sólo pilló de sorpresa al partido gobernante, sino también a los socialistas. Zapatero era, en muchos aspectos, un candidato accidental del que no se esperaba que conquistara la presidencia. Nacido en León en 1960 en una familia republicana –su abuelo, capitán de la República, fue fusilado por los nacionalistas en agosto de 1936–, se afilió a las Juventudes Socialistas a los 18 años, dos días después de su legalización. En 1982 fue nombrado secretario provincial del PSOE. Cuatro años después, con 26 años, fue elegido diputado en el Congreso, mientras que se convertía en secretario general del PSOE de León en 1988. La condición necesaria para este tranquilo ascenso fue la obediencia a la ortodoxia del partido: el apoyo a la integración en la OTAN en el referéndum de 1986, ninguna salida de tono acerca de las políticas neoliberales del PSOE o la utilización de los paramilitares de los GAL para asesinar a los separatistas vascos, ningún atisbo de crítica de la máquina del partido o de la corrupción, de la cooptación y del estrangulamiento de la vida pública que caracterizó los años felipistas.

No obstante, la promoción ulterior de Zapatero –y de muchos «renovadores» socialistas de segunda generación como él– dependía de la salida de los feli-



pistas. Una sucesión de derrotas y escándalos proporcionó la ocasión propicia. Joaquín Almunia, que reemplazó a González tras el desastre socialista de 1996, fue derrotado contundentemente por el ex ministro de Transportes José Borrell en unas primarias del partido para la designación del candidato a la presidencia en 1998. Borrell fue obligado más tarde a dimitir por un escándalo de corrupción, lo que provocó el regreso de Almunia, que sin embargo fue de nuevo derrotado estrepitosamente en las elecciones generales de 2000. Un truculento congreso del partido eligió entonces a Zapatero frente a José Bono, el candidato preferido por la dirección. Con la sorpresa de marzo de 2004, los jefes felipistas del PSOE se precipitaron para colocar a sus propios candidatos en los principales puestos ministeriales, ocupados por lugartenientes de escaso peso durante los inhóspitos años de la oposición. Pedro Solbes y Javier Solana fueron requeridos urgentemente desde sus puestos en Bruselas, donde, como Kinnock, Patten o Prodi, habían estado disfrutando de la réplica europea al «descenso de los cielos» japonés, tras el rechazo de sus propios electores. Como cabía esperar, Solbes abandonó su gestión del Pacto de estabilidad para regresar al Ministerio de Economía en Madrid, puesto que ya había ocupado con González durante la desastrosa recesión que conoció un aumento vertiginoso del desempleo entre 1993 y 1996. A Bono le correspondió el Ministerio de Defensa. Sin embargo, en la disputa entre bastidores el equipo de Zapatero se las arregló para salirse con la suya en la designación del ministro de Asuntos Exteriores. El ex secretario general de la OTAN fue desbancado en la liza por el puesto por Miguel Ángel Moratinos, un colaborador mucho menos dócil.

Tras sus primeros nueve meses en el poder, el gobierno de Zapatero no deja de ser un cierto y bienvenido alivio respecto al sobrecalentamiento inducido por las ambiciones aznaristas de abrir un hueco para España en el escenario provocado por la Guerra contra el Terrorismo. Zapatero ha conseguido más cosas, y mejores, que las que obtuviera González en su primer año. Sin embargo, no han de exagerarse los contrastes. La decisión encomiable de retirar las tropas españolas de Iraq fue seguida de un aumento del contingente en Afganistán, un candidato más aceptable para la ocupación a ojos occidentales; otras tantas fueron enviadas a Haití tras el derrocamiento de Aristide. El restablecimiento de relaciones con Venezuela, y la condena de Moratinos en noviembre de 2004 del apoyo de Aznar al intento de golpe contra Chávez de 2002, han marcado un cambio de énfasis, al igual que la presión de Madrid para el levantamiento de las sanciones impuestas a Cuba por la UE en el verano de 2003. Sin embargo, se trata aquí —al igual que en la decisión de colaborar con otras potencias europeas en el cambio del sistema de votación de la UE— de una vuelta a los caminos trillados de la diplomacia del interés nacional.

En otros ámbitos, el radicalismo en áreas marginales ha compensado la notable continuidad de las políticas conservadoras. Las instituciones del acuerdo posfranquista están a buen recaudo en manos de Zapatero. La Corona no tiene mayor temor que el del eventual acceso al trono de sus hijas, cuando la Ley Sálica desaparezca de las disposiciones sucesorias. Zapatero ha

presionado para que sean aprobados derechos de pensión para los varios cientos de supervivientes de los niños evacuados del bando republicano, de nuevo, una ruptura bienvenida frente el silencio de González sobre la Guerra Civil. La Iglesia se levantó en armas contra las propuestas socialistas de reforma del Código Civil encaminadas a la legalización del matrimonio homosexual y contra la liberalización adicional del divorcio, del aborto y de la investigación sobre células madre. Sin embargo, como señalaba *El País*, el «tono lamentablemente radical» que ha caracterizado en un principio la campaña de la Iglesia, «en la que se ha utilizado un lenguaje insultante para hablar de los matrimonios gay», no tardó en aminorarse: «Cabe achacar este cambio a las garantías ofrecidas por el presidente, que insiste en que no tiene ningún interés particular en revisar los acuerdos fiscales con la Iglesia. Sólo cabe agradecer a ambas partes la moderación de su actitud»<sup>12</sup>. La violencia de género ha sido criminalizada, aunque se han dispuesto muy pocos recursos para el cumplimiento de la nueva legislación. Cualquier programa que quiera abordar sus causas profundas (por ejemplo, la creación de refugios para mujeres maltratadas y la expansión y subvención del cuidado de los hijos que permita un mayor nivel de empleo femenino —que se sitúa en el 44 por 100, sensiblemente por debajo del 55,5 por 100 estipulado por la UE—) entraría en contradicción con el compromiso inquebrantable de los socialistas con el libre mercado y la austeridad presupuestaria. Sin embargo, por más leves que parezcan estas reformas, en comparación con sus pares —Blair, Schroeder, Persson—, hay que hacer constar que hasta el momento Zapatero se ha ganado sin duda la consideración de dirigente menos malo del centro-izquierda europeo.

Su problema más inmediato es la relación tremendamente polarizada entre el País Vasco y el centro, y el desafío lanzado contra el compromiso casi federal de 1978 por el Plan Ibarretxe. El 30 de diciembre de 2004, el Parlamento vasco aprobó el Plan Ibarretxe por 39 votos a favor y 35 en contra, después de que tres diputados de Sozialista Abertzaleak (el nombre del grupo parlamentario de Batasuna tras la ilegalización de esta formación) decidieran apoyarlo en un cambio súbito de parecer. Ahora el Parlamento vasco está obligado a renegociar el Estatuto de Guernica de 1979 para conseguir para la comunidad una magistratura propia y una mayor representación independiente dentro de la UE. Siempre que ETA se avenga a una tregua, acarreará entonces la celebración de un referéndum sobre el Plan en el País Vasco —donde más del 60 por 100 de la población adulta son favorables a un mayor grado de soberanía, aunque sólo un 31 por 100 respaldan la plena independencia—. De esta suerte, el proceso se adentra en un territorio desconocido. El referéndum mismo ha sido declarado ilegal, mientras que el PP trata de conseguir un pronunciamiento más del Tribunal Supremo que desautorice el debate en el Parlamento sobre el Plan vasco. Zapatero ha dicho del Plan Ibarretxe que es «secesionista, inconstitucional e incompatible con una Europa que aspira a eliminar las fronteras *[sic]*». No obstante, su gobierno depende del apoyo de los catalanistas de ERC, favorables al Plan

---

<sup>12</sup> *El País* (2 de octubre de 2004).

y ansiosos por renegociar su propio Estatuto de Sau de 1979. Una extrema derecha bien acaudalada ha emprendido una movilización contra los pasos provisionales dados por Zapatero encaminados a la concesión de medidas de libertad para los presos vascos y a la celebración posterior de conversaciones. Para el PP, este asunto les permite ocultar su revanchismo después de la derrota electoral tras la bandera de un españolismo espurio, que no se define sino por la utilización de la animadversión popular hacia ETA.

Aunque ha sido ensalzada por los comentaristas occidentales como ejemplo de libro del éxito de una evolución democrático-capitalista, la experiencia de la España posfranquista está llena de contradicciones. Las tasas de crecimiento de los últimos diez años no han resuelto las fragilidades subyacentes a una economía postindustrial. A partir de 2006, los subsidios de la UE que han alentado aquellas tasas serán redirigidos a los nuevos países miembros del Este. La falta de regulación, y el traspaso de las competencias de la tasación del suelo a las interesadas administraciones locales, ha contribuido a generar una burbuja inmobiliaria que hace palidecer a las de Estados Unidos o Gran Bretaña en términos relativos, y que por añadidura está sesgada por la presencia de la inversión extranjera. El volumen extraordinariamente alto de desempleo coexiste con una inmigración a gran escala, procedente sobre todo de Marruecos y de América Latina. Una legislación represiva asociada a una práctica permisiva ha traído consigo un número creciente de trabajadores extranjeros –el 13 por 100 en las principales ciudades–, en su mayoría carentes de todo estatuto legal. En los campos de fresa de Huelva y en los invernaderos de El Ejido, condiciones de trabajo del Tercer Mundo llenan los bolsillos henchidos de Barcelona, Valencia o Madrid, mientras cada día más cadáveres son arrastrados por el mar hasta las playas de Andalucía.

A decir verdad, la era González puso en marcha una neoliberalización de características muy hispanas. La relación no resuelta entre el poder central y las regiones y los nacionalismos de la periferia ha conducido a una duplicación sistemática de los servicios, que ha creado una enorme hipertrofia del sector público en sustitución del andamiaje social franquista. La corrupción ha invadido todos los poros, pero donde florece de forma más ostensiva es en el interfaz entre el sector de la construcción y los múltiples niveles de la administración, aunque la mejor parte corresponde a las operaciones empresariales, las liquidaciones y los préstamos entre las secciones de la élite. Los desequilibrios estructurales alimentan una enorme economía informal que flota gracias al crédito, pero que carece de toda protección frente a la recesión. Los efectos desestabilizadores de la polarización centrífuga, que opone las aspiraciones vascas y catalanas a la autodeterminación a unos poderes centrales atrincherados, contribuyen asimismo a poner de manifiesto los sólidos intereses de Estado que se ocultan tras la cháchara sobre la era posnacional. Lejos de presentarse como un ejemplo de cómoda domesticación, España parece presentarse en la actualidad como un preocupante espejo de la Europa venidera.